

Dilucidaciones necesarias:

El pragmatismo como filosofía es una corriente originada en Estados Unidos a finales del siglo XIX, y su núcleo central consiste en valorar las ideas, teorías y creencias no por su adecuación abstracta a una verdad absoluta, sino por su utilidad práctica para orientar la acción y resolver problemas.

El pragmatismo surge como una respuesta crítica al racionalismo y al empirismo clásicos, así como al idealismo europeo.

Recordemos que el racionalismo (Descartes, Leibniz, Spinoza) defendía que la verdad se alcanza a través de principios claros, evidentes y universales, descubiertos por la razón. El pragmatismo critica esta postura porque considera que las ideas no deben evaluarse solo por su coherencia lógica o por su carácter "evidente", sino por sus efectos prácticos en la experiencia. Para los pragmatistas, la verdad no es un axioma abstracto, sino un proceso vivo que se verifica en la acción.

Por su parte, el empirismo (Locke, Berkeley, Hume) sostenía que todo conocimiento proviene de la experiencia sensible y que la mente es como una "tabla rasa" donde se imprimen las percepciones. El pragmatismo reconoce la importancia de la experiencia, pero critica la visión pasiva del empirismo: para Peirce, James y Dewey, el ser humano no es un receptor pasivo de datos, sino un agente activo que interpreta, selecciona y transforma la experiencia en función de fines prácticos. La experiencia, más que simple percepción, es interacción y acción en el mundo.

Es así como también, el idealismo (Kant, Hegel, Fichte, Schelling) defendía que la realidad se comprende a partir de estructuras trascendentales de la conciencia o de grandes sistemas filosóficos totalizantes. El pragmatismo reacciona contra este afán de construir sistemas absolutos y cerrados, porque considera que tales construcciones se alejan de la vida cotidiana y de los problemas concretos. Para los pragmatistas, el pensamiento no debe ser un "fin en sí mismo", sino una herramienta para mejorar la vida práctica y social.

En una época marcada por el avance científico y la transformación social, los pragmatistas buscan una filosofía que esté al servicio de la vida práctica, capaz de conectar pensamiento y acción.

La verdad, para el pragmatismo, no es una correspondencia estática con la realidad, sino el resultado de aquello que "funciona" en la experiencia. En palabras de William James¹, lo verdadero es "lo útil en la experiencia". Es decir, una idea se considera válida si produce consecuencias satisfactorias y se verifica en la práctica.

1 **William James (1842-1910)** fue un filósofo y psicólogo estadounidense, considerado uno de los principales fundadores del pragmatismo y de la psicología moderna en Estados Unidos. Su pensamiento influyó tanto en la filosofía como en la educación, la religión y la psicología aplicada. Defendió que la verdad se mide por su eficacia práctica, es decir, por las consecuencias que tiene en la vida real y en la experiencia humana. Propuso una filosofía centrada en la experiencia individual y la acción, en lugar de sistemas abstractos o metafísicos. En "The Will to Believe" (1897), defendió el derecho a creer en Dios o en principios éticos aun sin pruebas absolutas, si la creencia tiene consecuencias positivas para la vida y la acción moral. Sostuvo que la religión podía ser valorada por su efecto práctico en la vida humana, no solo por doctrinas abstractas.

Para Charles Sanders Peirce², el conocimiento se construye en una comunidad de investigación, a través de hipótesis que se ponen a prueba en la experiencia. No hay verdades absolutas, sino verdades provisionales que se confirman o se refutan en función de su capacidad de resolver dudas y orientar la acción.

John Dewey³ extendió el pragmatismo al campo de la educación y la política. Sostenía que el pensamiento es un instrumento para mejorar la vida colectiva y que la democracia no solo es un sistema político, sino una forma de vida basada en la cooperación y la experimentación social. Así, el pragmatismo se convierte en una filosofía con implicancias éticas y políticas, no solo epistemológicas.

En la posmodernidad, Richard Rorty⁴ retomó el pragmatismo para criticar la idea de verdades universales, proponiendo en cambio un énfasis en el diálogo, la solidaridad y la construcción de consensos. De este modo, el pragmatismo filosófico se vincula con la flexibilidad, la pluralidad y el carácter abierto de la verdad en la sociedad contemporánea.

-
- 2 **Charles Sanders Peirce (1839-1914)** fue un filósofo, lógico, matemático y científico estadounidense, considerado un justificador del pragmatismo (aunque él mismo lo llamó "pragmaticismo" para diferenciarlo de otras interpretaciones posteriores). Desarrolló el pragmatismo como método para clarificar el significado de los conceptos, porque para él, el significado de una idea se define por sus efectos prácticos concebibles. Propuso que toda noción o teoría debe ser evaluada en función de las consecuencias prácticas que produciría si se aplicara. Diferenció entre el pragmatismo como método lógico y su versión más radical (pragmaticismo), que buscaba evitar confusiones con interpretaciones subjetivas. Es considerado uno de los padres de la lógica moderna, desarrollando conceptos como los diagramas existenciales y la lógica de relaciones. Fundó la semiótica moderna, el estudio de los signos y su interpretación, estableciendo que todo conocimiento depende de procesos de representación y comunicación.
 - 3 **John Dewey (1859-1952)** fue un filósofo, pedagogo y psicólogo estadounidense, considerado uno de los principales exponentes del pragmatismo y un referente de la educación progresista. Su pensamiento integró filosofía, educación, ética y política, con un énfasis en la experiencia y la acción como bases del conocimiento y del aprendizaje. Dewey desarrolló el pragmatismo, extendiendo las ideas de Peirce y James hacia la acción social y educativa. Para él, la verdad y el conocimiento surgen de la experiencia y de la resolución de problemas concretos, no de teorías abstractas. Abogó por una filosofía experimental y democrática, que vincule pensamiento y práctica, conocimiento y vida cotidiana. Es uno de los principales referentes de la educación progresista. Propuso que el aprendizaje debe ser activo y participativo, centrado en la experiencia del estudiante y en la resolución de problemas reales. Sostenía que la escuela debe preparar a los ciudadanos para la vida democrática, fomentando pensamiento crítico, cooperación y responsabilidad social. Dewey concibió la democracia como un modo de vida, no solo como un sistema político: requiere diálogo, participación y experimentación social. La ética, según él, se basa en la evaluación de consecuencias prácticas de nuestras acciones y en la mejora del bienestar colectivo.
 - 4 **Richard Rorty (1931-2007)** fue un filósofo estadounidense contemporáneo, considerado uno de los principales exponentes del pragmatismo posmoderno. Su obra se centra en la filosofía del lenguaje, la epistemología y la crítica a la idea de verdades absolutas o universales, promoviendo en cambio una visión basada en la utilidad práctica del pensamiento y en la solidaridad social. Rorty reinterpretó el pragmatismo clásico de Peirce, James y Dewey, adoptando una postura más posmoderna, centrada en el lenguaje y la conversación social. Rechazó la idea de una verdad objetiva y universal; sostuvo que las afirmaciones de verdad deben evaluarse por su efectividad práctica en la vida humana y en la cooperación social. Criticó la filosofía tradicional que busca fundamentos absolutos para el conocimiento y la moral, proponiendo en cambio un enfoque flexible y contingente. Para Rorty, el lenguaje no es un espejo de la realidad, sino un instrumento de comunicación y acción. La filosofía debe orientarse a resolver problemas y promover diálogo, no a descubrir verdades metafísicas inmutables. Esto conecta con la idea de que la sociedad progresa mediante la conversación y la revisión constante de nuestras creencias según su utilidad social. Rorty vinculó el pragmatismo con la solidaridad y la justicia social, defendiendo una política basada en la empatía y en la construcción de consensos, más que en principios universales rígidos. Consideró que los debates políticos y sociales deben centrarse en mejorar la vida de las personas, evitando discursos abstractos que no produzcan efectos concretos en la sociedad.

Relaciones entre el pragmatismo, la confianza pública y la sostenibilidad democrática

El pragmatismo como factor de confianza pública inmediata

El pragmatismo político se distingue por su capacidad de enfocar la acción gubernamental en la resolución de problemas concretos y urgentes, dejando en segundo plano discusiones ideológicas prolongadas. Esta orientación práctica responde directamente a las expectativas de la ciudadanía, que valora resultados visibles y tangibles. Por ejemplo, la implementación rápida de políticas de seguridad, de empleo o de servicios esenciales genera una percepción de efectividad y compromiso, mostrando que la política no es un discurso abstracto sino una herramienta capaz de mejorar la vida cotidiana.

Además, esta capacidad de respuesta inmediata contribuye a fortalecer la legitimidad percibida del gobierno. Cuando los ciudadanos constatan que sus necesidades y preocupaciones reciben atención prioritaria, se incrementa la confianza en los líderes y en las instituciones que representan. Esta legitimidad no depende únicamente de normas o procedimientos formales, sino de la experiencia concreta de que las decisiones políticas producen efectos positivos en la sociedad. En ese sentido, el pragmatismo se convierte en un vínculo directo entre la acción del Estado y la satisfacción de expectativas ciudadanas.

Sin embargo, la confianza generada por el pragmatismo suele ser temporal y condicionada. Su eficacia inmediata refuerza la credibilidad en el corto plazo, pero si no se acompaña de coherencia institucional y respeto por la legalidad, puede desvanecerse. Los ciudadanos pueden percibir que los resultados rápidos son puntuales o coyunturales, y que no reflejan un proyecto sostenido de gobernabilidad. Por eso, para que el pragmatismo consolide la confianza pública, debe combinarse con transparencia, planificación estratégica y consistencia ética, evitando que la búsqueda de soluciones inmediatas se transforme en oportunismo o en desgaste de la credibilidad institucional.

El riesgo de la desconfianza por la incoherencia

El pragmatismo político, cuando se ejerce de manera excesiva, puede generar una percepción de incoherencia ante la ciudadanía. Cambios constantes de postura, alianzas oportunistas y ajustes de discurso según conveniencia inmediata producen la sensación de que los líderes no mantienen un marco ético ni un proyecto claro. Esta percepción afecta directamente la relación de confianza entre gobernantes y gobernados, porque la política deja de percibirse como un espacio de orientación confiable y se transforma en un escenario de maniobras tácticas.

La erosión de la confianza se profundiza cuando los ciudadanos detectan que las decisiones pragmáticas carecen de consistencia con los valores declarados o con compromisos previos. El oportunismo, aunque pueda generar resultados inmediatos, transmite la idea de que los intereses políticos propios prevalecen sobre el bien común. Como consecuencia, se genera desencanto y escepticismo: la población comienza a dudar no solo de la capacidad de los gobernantes para resolver problemas, sino también de su integridad y responsabilidad ética, debilitando la legitimidad percibida de las instituciones.

La desconfianza por incoherencia tiene efectos acumulativos y de mediano y largo plazo sobre la estabilidad democrática. Cuando la ciudadanía percibe que la política carece de principios firmes y de continuidad, se reduce la participación cívica y crece la apatía o el rechazo hacia las instituciones. Esta situación favorece la polarización, el populismo o la concentración de poder, ya que los ciudadanos buscan soluciones inmediatas en detrimento de la deliberación democrática. Por ello, la coherencia y la transparencia en el pragmatismo político son esenciales para que la acción efectiva no se transforme en un factor de debilitamiento de la confianza y del tejido institucional.

La sostenibilidad democrática depende de la confianza en reglas estables

La sostenibilidad de una democracia no se fundamenta únicamente en la celebración de elecciones periódicas, sino en la confianza ciudadana en la estabilidad de las instituciones y de las normas que rigen la vida social. Cuando los ciudadanos perciben que las leyes se aplican de manera justa y equitativa, y que los procedimientos institucionales se respetan, se genera un clima de certidumbre que permite la cooperación, la participación y la resolución pacífica de conflictos. Esta confianza en las reglas es el eje que mantiene un equilibrio entre la autoridad del Estado y la libertad de los individuos, consolidando así la legitimidad del sistema democrático.

El pragmatismo político, si se ejerce sin límites, puede amenazar esta estabilidad. Decisiones arbitrarias, cambios frecuentes de políticas o la aplicación desigual de la ley generan percepción de injusticia y de parcialidad entre los ciudadanos. Cuando los gobernantes priorizan la conveniencia inmediata sobre la coherencia normativa, la ciudadanía puede sentir que las reglas no son confiables ni universales, lo que socava la autoridad institucional y disminuye la disposición de la población a acatar normas o a participar activamente en la vida democrática.

Por ello, la confianza en reglas estables es condición indispensable para la sostenibilidad democrática a largo plazo. Incluso cuando el pragmatismo permite respuestas rápidas a problemas urgentes, su eficacia debe enmarcarse en el respeto a los procedimientos y principios fundamentales. La estabilidad normativa asegura que la acción política no dependa de la voluntad momentánea de los gobernantes, sino que se sostenga en un marco coherente y predecible. De esta manera, la democracia mantiene su legitimidad y resistencia frente a crisis, promoviendo un compromiso ciudadano duradero y evitando la erosión del tejido institucional.

La tensión entre eficacia inmediata y estabilidad institucional

El pragmatismo político se caracteriza por su capacidad para generar resultados rápidos y visibles, lo que puede ser especialmente valioso en situaciones de crisis o emergencia. Cuando los gobiernos logran atender problemas urgentes, como desastres naturales, fallas en servicios esenciales o amenazas de seguridad, la ciudadanía percibe efectividad y se fortalece la legitimidad inmediata del poder. Esta eficacia práctica tiene un valor indiscutible, ya que demuestra que la política puede traducirse en soluciones concretas, reforzando temporalmente la confianza en los líderes y en las instituciones.

Sin embargo, cuando el pragmatismo se convierte en la lógica predominante de gobierno, surgen riesgos significativos para la estabilidad institucional. La acción centrada exclusivamente en resultados inmediatos tiende a subordinar los procesos, los procedimientos legales y los principios éticos a la conveniencia del momento. Esta dinámica genera un conflicto entre la urgencia de actuar y la necesidad de respetar las reglas que garantizan equidad, transparencia y continuidad institucional. La ciudadanía puede percibir que la política funciona de manera arbitraria, lo que erosiona la confianza en la justicia, la imparcialidad y la previsibilidad de las instituciones.

En consecuencia, la eficacia inmediata y la estabilidad institucional deben entenderse como componentes complementarios, no como objetivos excluyentes. Una democracia que prioriza solo la eficiencia práctica corre el riesgo de comprometer su sostenibilidad a largo plazo, ya que los resultados visibles no sustituyen la legitimidad derivada del respeto a normas, derechos y procesos. Por ello, los gobiernos deben equilibrar la capacidad de respuesta rápida con el fortalecimiento de marcos institucionales sólidos, garantizando que las soluciones coyunturales no debiliten la confianza ciudadana ni el tejido institucional que sostiene la vida democrática.

Equilibrio como condición de legitimidad democrática

El pragmatismo político puede ser altamente eficaz para gestionar situaciones inmediatas y responder a demandas urgentes de la ciudadanía, como la seguridad, los servicios básicos o la atención a emergencias. Sin embargo, su utilidad se mantiene únicamente cuando se enmarca dentro de un conjunto de principios sólidos, como la legalidad, la transparencia y el respeto a las instituciones. Este marco asegura que la acción rápida no se confunda con improvisación ni con arbitrariedad, y que la percepción de eficiencia se traduzca en una legitimidad real y sostenible.

El equilibrio entre eficacia práctica y respeto institucional es crucial para fortalecer la confianza pública. Cuando los ciudadanos observan que las decisiones se toman con rapidez, pero también con coherencia y apego a normas claras, perciben a la política como confiable y responsable. Este tipo de gestión genera credibilidad no solo en el corto plazo, sino que cimenta la disposición de la población a participar activamente en la vida democrática, reconociendo que la acción gubernamental combina resultados concretos con principios duraderos.

Por el contrario, la falta de equilibrio convierte al pragmatismo en un factor de erosión de la confianza ciudadana. Decisiones apresuradas sin transparencia o sin respeto a la legalidad pueden generar desencanto, apatía o incluso rechazo hacia las instituciones democráticas. En los contextos más extremos, la percepción de arbitrariedad y la ausencia de reglas claras pueden abrir la puerta a soluciones autoritarias, donde la eficacia se impone sobre la legitimidad. Por ello, la verdadera legitimidad democrática depende de que la acción pragmática se integre de manera equilibrada con los principios institucionales, garantizando la sostenibilidad y la estabilidad del sistema político.

Pragmatismo: el discurso oscilante entre la urgencia y la imprevisión:

El pragmatismo político, al centrarse en resultados inmediatos, puede generar la percepción de eficacia, pero a veces confunde la urgencia con la imprevisión, y lo hace mediante diversas estrategias discursivas y argumentales.

Se enfatiza así la urgencia de actuar para resolver problemas concretos, presentando cualquier demora como inaceptable. El discurso resalta la rapidez y la acción directa, haciendo parecer que la decisión inmediata es sinónimo de buena gestión, aunque en realidad no haya un análisis previo exhaustivo. La ciudadanía percibe que "hacer algo rápido" es siempre la mejor opción, aunque la acción pueda ser improvisada o incompleta.

El pragmatismo recurre a la demostración de logros tangibles, como obras inauguradas, servicios habilitados o programas implementados, para legitimar la gestión. Este énfasis en la visibilidad genera la ilusión de control y planificación, mientras que la falta de estrategia a largo plazo queda oculta. La narrativa se centra en el efecto inmediato sobre la población, desviando la atención de la posible imprevisión o de consecuencias futuras no previstas.

En contextos de crisis, los discursos pragmáticos tienden a reducir problemas complejos a soluciones inmediatas y concretas, evitando debates sobre causas estructurales o planificación estratégica. Esto transmite la sensación de respuesta eficiente, pero oculta que la actuación puede ser reactiva y poco sostenible. La ciudadanía recibe la impresión de que la rapidez es equivalente a preparación, confundiendo urgencia con previsión.

Se emplean términos que enfatizan riesgo, emergencia o amenaza inminente, construyendo un escenario donde la inacción se percibe como irresponsabilidad. Esta estrategia refuerza la idea de que cualquier decisión rápida es preferible a la deliberación cuidadosa, aunque tal decisión pueda carecer de respaldo técnico o institucional.

A menudo se contrastan los resultados inmediatos con la supuesta lentitud o paralización de otros actores políticos, creando un relato de eficiencia frente a la incompetencia ajena. Esto legitima la acción inmediata y refuerza la percepción de que la improvisación es, en realidad, prudencia o habilidad, aunque en el fondo se trate de ausencia de planificación.

Implicancias en el escenario de la gobernanza y la gobernabilidad:

La gobernabilidad se refiere a la capacidad del Estado y de sus autoridades para gobernar, es decir, para diseñar, implementar y hacer cumplir políticas públicas y leyes. Está asociada a la eficacia del gobierno, la estabilidad política y la obediencia de los ciudadanos a las normas.

La gobernabilidad responde a preguntas como: ¿El gobierno puede tomar decisiones y aplicarlas de manera efectiva? ¿Existen instituciones sólidas que aseguren cumplimiento y control?. Todo ello, porque la gobernabilidad enfatiza el poder del Estado para mantener el orden y la estabilidad.

Por su parte, **la gobernanza se refiere al proceso de toma de decisiones** y gestión de asuntos públicos, incluyendo la participación de múltiples actores: Estado, sector privado, sociedad civil y organismos internacionales. No se centra únicamente en la autoridad formal del gobierno, sino en cómo se coordinan, negocian y consensúan las decisiones entre distintos actores. La gobernanza

responde a preguntas como: *¿Cómo se involucra la ciudadanía en las decisiones? ¿Cómo se coordinan los diferentes sectores para alcanzar objetivos comunes?*, porque enfatiza la colaboración, la participación y la transparencia en la gestión pública, más que la mera autoridad del Estado.

La complejidad de la sociedad actual exige soluciones prácticas inmediatas

En la posmodernidad, marcada por la globalización, la digitalización y la diversidad cultural, los problemas son interconectados y cambiantes. El pragmatismo permite a la política adaptarse rápidamente, priorizando la eficacia de las decisiones sobre las ideologías rígidas. Lo urgente y concreto prima sobre lo absoluto.

Esta orientación pragmática facilita que los gobiernos puedan responder con rapidez a crisis o necesidades emergentes, desde desastres naturales hasta cambios económicos repentinos o problemas de salud pública. La capacidad de adaptación inmediata permite reducir los efectos negativos de situaciones críticas, demostrando a la ciudadanía que la política puede ser útil y funcional. En contextos donde las instituciones tradicionales y los procesos burocráticos resultan lentos, el pragmatismo se percibe como un instrumento de eficiencia y pertinencia social, capaz de conectar las decisiones políticas con la vida diaria de las personas.

La desconfianza en los grandes relatos ideológicos

La posmodernidad cuestiona los “metarrelatos” (Lyotard), es decir, los sistemas ideológicos universales que prometían dar sentido a todo. En este contexto, el pragmatismo se justifica porque la ciudadanía demanda propuestas concretas que mejoren la vida cotidiana, más allá de discursos doctrinarios que muchas veces no ofrecen resultados visibles.

La desconfianza en los metarrelatos genera un escenario donde los ciudadanos valoran más los resultados tangibles que las promesas ideológicas abstractas. En lugar de debates prolongados sobre principios doctrinales, se privilegia la acción concreta que solucione problemas inmediatos, como empleo, seguridad, salud o transporte. Esta exigencia de eficacia transforma la política en un espacio más pragmático y funcional, donde la credibilidad se construye a partir de logros perceptibles y medibles, y no de discursos que no se traducen en beneficios reales para la sociedad.

El pluralismo social obliga a negociar constantemente

Las sociedades posmodernas son fragmentadas y multiculturales. El pragmatismo político se convierte en la vía más viable para llegar a acuerdos, ya que no parte de una verdad única, sino de la búsqueda de consensos operativos que permitan la convivencia y la gestión de conflictos sin imponer una visión totalizante.

El pluralismo obliga a los gobernantes a adoptar una lógica de flexibilidad y compromiso, en la que los intereses de distintos grupos sociales deben ser equilibrados para garantizar la cohesión social. En este contexto, el pragmatismo político funciona como una herramienta de mediación, priorizando

soluciones prácticas que satisfagan parcialmente a múltiples actores, en lugar de imponer doctrinas rígidas que podrían generar confrontación o exclusión. Este enfoque permite que las decisiones políticas sean más inclusivas y aceptables, fomentando la cooperación y reduciendo tensiones derivadas de la diversidad social y cultural.

La rapidez de los cambios tecnológicos y económicos

El ritmo de innovación tecnológica y de transformación económica en la posmodernidad obliga a la política a ser flexible. El pragmatismo, al centrarse en lo funcional y lo adaptable, evita quedar atrapado en esquemas obsoletos, apostando por respuestas contextuales que atiendan los desafíos inmediatos.

La aceleración de los cambios tecnológicos y económicos genera incertidumbre en la planificación política a largo plazo, ya que políticas diseñadas bajo supuestos antiguos pueden volverse rápidamente ineficaces. El pragmatismo permite que los gobiernos ajusten sus estrategias y programas de manera continua, adaptándose a nuevas condiciones de mercado, avances digitales o transformaciones laborales. Esta capacidad de respuesta rápida se percibe como un instrumento necesario para mantener la relevancia de la acción política y atender las necesidades emergentes de la ciudadanía en tiempo real.

La política como gestión más que como dogma

En la posmodernidad, los ciudadanos valoran a los líderes y gobiernos por su capacidad de resolver problemas concretos (seguridad, empleo, medio ambiente, salud), más que por la fidelidad ideológica. El pragmatismo justifica esta orientación hacia la gestión práctica, entendiendo la política como un servicio de soluciones más que como la aplicación de doctrinas rígidas.

Esta orientación transforma la percepción de la política, enfocándola en resultados tangibles y medibles en lugar de debates doctrinarios abstractos. La ciudadanía espera que los gobiernos actúen de manera efectiva ante problemas concretos, y valora la capacidad de priorizar soluciones sobre la defensa estricta de ideologías. Así, el pragmatismo permite que la política funcione como herramienta de gestión, adaptando estrategias y recursos a las necesidades reales de la sociedad, sin quedar atrapada en postulados teóricos que no producen beneficios inmediatos.

De qué manera el pragmatismo político confronta o es incompatible con la legalidad e institucionalidad

La primacía de la eficacia sobre la norma

El pragmatismo político, al centrar su lógica en la resolución inmediata de problemas concretos, tiende a priorizar la eficacia por encima del cumplimiento estricto de las normas. Cuando los gobernantes perciben que los procedimientos legales o las regulaciones administrativas obstaculizan la acción rápida, pueden sentirse autorizados a reinterpretar, flexibilizar o incluso eludir esas normas. Este enfoque instrumental convierte la legalidad en un obstáculo circunstancial, en lugar de un marco que garantice estabilidad, equidad y justicia.

Esta primacía de la eficacia sobre la norma genera un riesgo directo para el Estado de derecho, ya que el respeto a la ley se vuelve condicionado y dependiente de la conveniencia política. La ciudadanía puede percibir que las normas son maleables, aplicadas de manera selectiva según intereses coyunturales, lo que erosiona la confianza en las instituciones y debilita la legitimidad del gobierno. El pragmatismo, en este contexto, deja de ser una estrategia de gestión para convertirse en una justificación de arbitrariedad.

Además, la confrontación con la legalidad tiene efectos a mediano y largo plazo sobre la gobernabilidad y la gobernanza. La acción pragmática que ignora la normativa puede generar conflictos institucionales, cuestionamientos judiciales y resistencia de otros actores políticos o sociales. Este tipo de tensión compromete la capacidad del Estado para sostener políticas coherentes, afectando tanto la estabilidad institucional como la colaboración necesaria entre actores públicos y privados.

Por último, la incompatibilidad entre pragmatismo y legalidad subraya la necesidad de equilibrio entre eficacia y respeto normativo. Los resultados inmediatos son valiosos, pero solo adquieren legitimidad si se logran dentro de un marco jurídico claro y transparente. La acción política sostenible requiere que el pragmatismo sea instrumento subordinado a la legalidad, garantizando que la búsqueda de soluciones prácticas no comprometa los principios de justicia, igualdad y previsibilidad que sustentan la democracia.

La relativización de los marcos institucionales

Cuando la acción política se orienta principalmente por la conveniencia momentánea, las instituciones pueden perder su carácter de garante de estabilidad y previsibilidad. En lugar de ser percibidas como estructuras que aseguran la aplicación coherente de la ley y el respeto a los derechos, son vistas por la ciudadanía y los propios actores políticos como obstáculos burocráticos que retrasan o dificultan la obtención de resultados inmediatos. Esta percepción debilita la autoridad institucional y reduce la confianza pública en el sistema democrático.

El pragmatismo que relativiza los marcos institucionales también tiende a instrumentalizar las instituciones para alcanzar objetivos coyunturales. Las agencias, tribunales, ministerios o consejos que deberían actuar con autonomía y criterios normativos se utilizan como herramientas al servicio de decisiones políticas urgentes, priorizando la eficacia momentánea sobre los procedimientos establecidos. Esta dinámica puede generar tensiones internas, arbitrariedad en la aplicación de políticas y percepción de injusticia, minando la credibilidad del Estado y la legitimidad de sus decisiones.

A largo plazo, la relativización de las instituciones compromete la sostenibilidad democrática. Cuando las estructuras que sostienen la democracia son tratadas como medios al servicio de intereses puntuales, se erosiona el equilibrio entre poder ejecutivo, legislativo y judicial, y se reduce la capacidad de la sociedad para confiar en la continuidad de normas y procedimientos. Por ello, la acción pragmática debe integrarse dentro de los marcos institucionales, asegurando que la búsqueda de soluciones inmediatas no degrade la autonomía, la estabilidad ni la legitimidad de las instituciones.

El debilitamiento del principio de igualdad ante la ley

El pragmatismo político, al centrarse en lo que resulta útil o viable en un momento determinado, puede propiciar decisiones que no respetan de manera uniforme las normas legales. Cuando los gobernantes toman decisiones priorizando la eficacia o la conveniencia política, se abre la posibilidad de que ciertos grupos o individuos reciban beneficios o privilegios especiales, mientras que otros quedan en desventaja. Esta práctica contradice la idea fundamental de que la ley debe aplicarse de manera imparcial y equitativa, sin favorecer intereses particulares por encima del bien común.

La aplicación selectiva de la ley tiene efectos profundos sobre la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando los ciudadanos perciben que el trato jurídico depende de influencia política, poder económico o presión social, se erosiona la percepción de justicia y se incrementa la desconfianza hacia el sistema legal y hacia quienes ejercen la autoridad. La desigualdad ante la ley genera desencanto, reduce la cooperación ciudadana y debilita la legitimidad de los órganos encargados de garantizar el cumplimiento normativo.

A largo plazo, el debilitamiento del principio de igualdad ante la ley puede poner en riesgo la sostenibilidad democrática. La imparcialidad jurídica es uno de los pilares que sostiene la estabilidad institucional y la cohesión social; su vulneración abre la puerta a arbitrariedad, corrupción y conflictos de intereses. Por ello, incluso dentro de un enfoque pragmático, la acción política debe respetar los principios fundamentales de igualdad y justicia, asegurando que la búsqueda de soluciones inmediatas no comprometa la imparcialidad y la confianza en la institucionalidad jurídica.

La erosión de los límites al poder político

En un sistema institucional sólido, los límites al poder político se materializan mediante leyes, contrapesos y mecanismos de supervisión que garantizan que ninguna autoridad concentre facultades sin control. Estos límites protegen la democracia al asegurar la separación de poderes, la rendición de cuentas y la equidad en la toma de decisiones. Sin embargo, el pragmatismo político, al priorizar la acción rápida y la resolución de problemas inmediatos, puede percibir estos límites como obstáculos a la eficacia y a la implementación de políticas, justificando su relativización o bypass.

Cuando se legitima la concentración de facultades en nombre de la eficiencia, los mecanismos de control y balance pierden fuerza. Las instituciones que deberían supervisar, fiscalizar o equilibrar el poder ejecutivo, como parlamentos, tribunales o contralorías, pueden ser relegadas a un papel secundario o instrumentalizadas para cumplir objetivos coyunturales. Esto no solo debilita la función de las instituciones de control, sino que también acentúa la percepción de arbitrariedad, erosionando la confianza pública en la imparcialidad y transparencia del gobierno.

A mediano y largo plazo, la erosión de los límites al poder político abre la puerta a prácticas autoritarias y a un debilitamiento estructural de la democracia. La centralización de decisiones y la reducción de contrapesos favorecen la toma de decisiones unilaterales, incrementando riesgos de abuso de poder y reduciendo la participación ciudadana. Por ello, incluso en contextos donde

el pragmatismo puede mejorar la eficacia gubernamental, es imprescindible que la acción política se desarrolle dentro de los límites institucionales, garantizando que la eficiencia no se transforme en concentración arbitraria de poder ni en amenaza para la sostenibilidad democrática.

La volatilidad normativa frente a la seguridad jurídica

El pragmatismo político se caracteriza por su énfasis en la adaptación constante y la flexibilidad, buscando respuestas rápidas a situaciones cambiantes. Si bien esta capacidad de ajuste puede ser útil para gestionar crisis, choca con uno de los principios fundamentales de la legalidad: la estabilidad normativa. La seguridad jurídica requiere que las normas sean previsibles y continuas, de modo que los ciudadanos, empresas y organizaciones puedan planificar sus acciones con confianza, sabiendo que las reglas no cambiarán arbitrariamente según conveniencias momentáneas.

Cuando las decisiones políticas se orientan exclusivamente por criterios pragmáticos, las leyes y regulaciones pueden volverse volátiles y contingentes, adaptándose a la conveniencia del momento en lugar de respetar procesos formales y principios institucionales. Esta flexibilidad excesiva transmite la sensación de que la normativa no es confiable, generando incertidumbre sobre la aplicación de derechos y obligaciones. Como consecuencia, la ciudadanía puede percibir que la política carece de coherencia y que las instituciones no garantizan protección ni imparcialidad, lo que debilita la confianza en el sistema democrático.

A largo plazo, la volatilidad normativa amenaza la seguridad jurídica, que es esencial para la estabilidad social y económica. La previsibilidad de las normas no solo protege derechos individuales y colectivos, sino que también sustenta el funcionamiento del mercado, la inversión y la convivencia civil. Por ello, incluso cuando el pragmatismo permite respuestas rápidas, estas deben enmarcarse en un marco legal estable, asegurando que la adaptabilidad no comprometa la confianza ciudadana ni la continuidad institucional necesaria para la sostenibilidad democrática.

Cómo considera la ciudadanía al pragmatismo político:

Valoración positiva por la búsqueda de resultados concretos

El pragmatismo político recibe una valoración positiva entre los ciudadanos cuando se traduce en la solución efectiva de problemas concretos que afectan directamente la vida cotidiana, como el empleo, la seguridad, la salud o la inflación. Esta orientación práctica genera la percepción de que la política es útil y funcional, al demostrar que los gobernantes pueden transformar las demandas sociales en acciones concretas. Para muchos ciudadanos, la capacidad de obtener resultados tangibles es más importante que la discusión ideológica o la planificación a largo plazo, especialmente en contextos de emergencia o crisis.

La eficacia inmediata se convierte así en un criterio central de valoración, reforzando la legitimidad percibida del gobierno. Cuando los ciudadanos constatan que sus necesidades reciben atención prioritaria, se refuerza la confianza en que la política funciona y que sus demandas no caen en el vacío.

Este tipo de pragmatismo genera satisfacción y respaldo ciudadano, porque traduce la acción política en beneficios visibles y medibles, consolidando la idea de que la gestión pública puede producir resultados positivos de manera tangible y rápida.

Sin embargo, la valoración positiva también depende de que los resultados sean percibidos como relevantes y duraderos. La ciudadanía aprecia el pragmatismo cuando logra soluciones efectivas y comprensibles, pero puede perder confianza si las acciones se limitan a logros superficiales o puntuales, sin continuidad ni coherencia institucional. Por ello, aunque la búsqueda de resultados concretos sea un factor de aprobación inmediata, su impacto sostenido sobre la confianza pública requiere equilibrio entre eficacia y respeto a la legalidad y a los procesos institucionales, garantizando que los beneficios no se vean comprometidos por la improvisación o la arbitrariedad.

Desconfianza por la falta de coherencia ideológica

Una de las principales críticas al pragmatismo político surge cuando la ciudadanía percibe cambios constantes de postura según la conveniencia. Cuando los líderes modifican sus posiciones ideológicas para adaptarse a coyunturas o maximizar beneficios políticos inmediatos, se genera la impresión de que carecen de principios firmes. Esta percepción alimenta la idea de que las decisiones políticas no están guiadas por valores o proyectos coherentes, sino por intereses circunstanciales, lo que erosiona la credibilidad de los gobernantes ante la población.

La falta de coherencia ideológica no solo afecta la imagen de los políticos, sino que tiene un impacto directo sobre la confianza en las instituciones. Cuando la ciudadanía percibe oportunismo, se refuerza la sensación de arbitrariedad y de que las políticas pueden cambiar sin aviso ni justificación clara. Esto fomenta un desencanto generalizado y puede consolidar la percepción de que “todos los políticos son iguales”, disminuyendo la participación cívica, la colaboración con las decisiones públicas y el compromiso con los procesos democráticos.

A mediano y largo plazo, la desconfianza derivada de la incoherencia ideológica amenaza la estabilidad democrática. La legitimidad de las instituciones depende no solo de la eficacia, sino también de la consistencia y la transparencia en la acción política. Por ello, aunque el pragmatismo pueda generar resultados inmediatos, su sostenibilidad requiere que las decisiones se articulen con un marco ético y principios claros, de modo que la flexibilidad estratégica no se transforme en oportunismo que debilite la confianza ciudadana y la legitimidad del sistema político.

Percepción de cercanía con la vida cotidiana

El pragmatismo político genera una percepción de cercanía con la vida cotidiana porque sus decisiones se centran en problemas concretos que afectan directamente a los ciudadanos, como la educación, la salud, el transporte o la seguridad. Al priorizar soluciones prácticas por sobre discursos abstractos o teorías políticas complejas, los gobernantes transmiten que comprenden y atienden las necesidades reales de la población. Esta aproximación tangible refuerza la

sensación de que la política no está alejada de la sociedad, sino que se inserta en la experiencia diaria de los ciudadanos.

La ciudadanía suele valorar este enfoque por considerarlo realista y aplicable, especialmente en contextos donde las discusiones ideológicas o los procedimientos burocráticos prolongados dificultan la respuesta inmediata. La acción pragmática muestra resultados visibles y comprensibles, lo que facilita la evaluación de la gestión gubernamental por parte de la población. Este contacto directo entre decisiones políticas y efectos concretos fortalece la percepción de utilidad y relevancia de la política, generando un vínculo de confianza entre los ciudadanos y quienes ejercen el poder.

Sin embargo, la cercanía percibida no garantiza sostenibilidad ni legitimidad a largo plazo si las decisiones pragmáticas carecen de coherencia normativa, ética o institucional. Aunque la acción práctica satisfaga necesidades inmediatas, su efectividad y la confianza que genera dependen de que esté enmarcada dentro de reglas claras, procedimientos transparentes y principios de justicia. De lo contrario, la percepción de cercanía puede convertirse en superficialidad, reforzando la idea de soluciones temporales sin garantizar estabilidad ni confianza duradera en la política.

Peligros del pragmatismo político ante la ciudadanía:

El pragmatismo político, aunque atractivo por su aparente eficacia, encierra peligros significativos para la ciudadanía cuando se convierte en la lógica dominante del poder. Su énfasis en la utilidad inmediata y en la búsqueda de soluciones rápidas puede llevar a un debilitamiento de la confianza pública en las instituciones. La ciudadanía percibe que, al privilegiar la conveniencia coyuntural sobre los principios y la legalidad, los gobernantes terminan actuando de manera oportunista, generando la sensación de que la política carece de rumbo y de valores estables.

Uno de los mayores riesgos es la erosión del principio de igualdad y justicia: cuando las decisiones se justifican por "lo que funciona" en el momento, los derechos ciudadanos pueden ser aplicados de manera desigual, favoreciendo a los grupos con mayor peso político o económico. Esto crea una ciudadanía fragmentada, en la que algunos se sienten protegidos y otros desamparados, lo que debilita la cohesión social.

Además, el pragmatismo político amenaza la seguridad jurídica y la estabilidad democrática. La ciudadanía necesita marcos normativos previsibles para confiar en que sus derechos serán respetados. Si los gobernantes cambian reglas según conveniencias circunstanciales, se genera incertidumbre, y la política se percibe como un terreno movedizo en el que nada garantiza la permanencia de las garantías adquiridas.

El pragmatismo político puede conducir al desencanto y la apatía ciudadana. Cuando los ciudadanos advierten que las decisiones carecen de fundamento ético y que todo se mide por el cálculo de utilidad, se instala la idea de que la política no sirve para transformar la sociedad ni para realizar un proyecto común, sino solo para resolver lo inmediato. Esta percepción mina la participación cívica y fortalece la indiferencia, abriendo el camino a fenómenos de populismo o autoritarismo que explotan la frustración social.

